

CAPÍTULO OCTAVO

IBEROAMÉRICA

IBEROAMÉRICA

Por Carlos Malamud

En el último trimestre de 2005 se celebraron con escasas diferencias de fechas la XV Cumbre Iberoamericana, en Salamanca, y la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, Argentina. Pese a las críticas sobre el exceso de Cumbres, sintetizadas en la frase del presidente Uribe sobre el «turismo presidencial» y a su naturaleza radicalmente diferente, el resultado de ambas reuniones permite hacer un buen diagnóstico de la situación internacional de la región. Esto es posible a partir de la entidad de los participantes de ambos eventos, que en bastantes casos son protagonistas comunes. A bote pronto, podríamos enumerar entre las cuestiones más importantes que preocupan a América Latina: las dificultades que encuentra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en su despliegue continental; los problemas de imagen de los Estados Unidos y, especialmente, de su presidente George W. Bush, ante la opinión pública latinoamericana; el imparable ascenso de China; el protagonismo regional que pretende lograr el comandante Hugo Chávez en torno a una serie de propuestas no demasiado precisas y que tienen su principal impulsor en los elevados precios del petróleo en los mercados internacionales; el acercamiento entre Venezuela y Cuba, que sumado a la creciente militarización del régimen bolivariano aumenta determinados temores en muchos gobiernos hemisféricos; el triunfo de Evo Morales en Bolivia y la magnitud de los interrogantes que suscita; el buen estado de las relaciones de España con el conjunto de América Latina y la creación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), como el órgano permanente de gestión del sistema iberoamericano y, cerrando la lista aunque sin agotarla, el empecinamiento del gobierno cubano en mantener un sistema político sin

futuro que compromete las relaciones con todos los países de la región, sin ningún tipo de excepción.

Pero las dos Cumbres celebradas, y sus resultados más o menos controvertidos, también dan pie para comenzar a hablar de algunos de los principales problemas políticos y económicos de América Latina, partiendo del hecho de que, al menos teóricamente, la Cumbre de las Américas debería haberse centrado en la creación de empleo y su contribución a la consolidación económica y democrática de los países americanos. Pero no sólo eso. En ambas Cumbres se hizo evidente el hecho de la próxima despedida de muchos de los mandatarios allí participantes, que no estarán presentes en las siguientes convocatorias, dada la intensidad del calendario electoral latinoamericano de los próximos meses (ver Cuadro 2). En el último tramo de 2005, Honduras y Bolivia han elegido presidentes. Mientras tanto, los resultados de la primera vuelta en Chile dejaron abierto el desenlace hasta mediados de enero, cuando se confirmó lo que decían todas las encuestas, el triunfo de Michelle Bachelet, y, en Haití, la difícil situación interna ha impedido cumplir con el cronograma electoral de diciembre de 2005, que ha sido postpuesto una y otra vez.

En 2006 deberán votar en elecciones presidenciales Brasil, México, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela. En aquellos países en que la reelección es posible (que cada vez son más en Iberoamérica), no siempre el resultado electoral está claro, inclusive para las prospecciones demoscópicas más osadas, que, como se ha visto, en el caso de Bolivia fracasaron estrepitosamente. Más allá de que la última palabra la pronuncian los ciudadanos el día de los comicios, lo cierto es que mientras el presidente Uribe, tras el fallo favorable del Tribunal Constitucional, tiene las encuestas a su favor, gracias a los altos índices de popularidad que posee, la situación del presidente Lula está marcada por la elevada incertidumbre que rodea los últimos tramos de su gestión. Esto se hizo más evidente a partir del momento en que comenzaron a destaparse los casos de corrupción que han golpeado a su círculo íntimo, tanto en el partido (el PT) como en el gobierno. En Venezuela, salvo una recuperación milagrosa de la lucidez de la oposición, las chances del presidente Chávez de ser reelegido por un nuevo período son grandes, pese a que el gobierno y los movimientos políticos que lo acompañan han obtenido resultados no del todo satisfactorios a la hora de movilizar a sus más fieles seguidores, como evidenció la baja participación en las elecciones legislativas de diciembre.

Al mismo tiempo, se han visto a lo largo y ancho del continente como se desarrollaban y cobraban fuerza algunos movimientos sociales, contrarios a las reformas «neoliberales» y a la globalización, que incluyen una agenda de reivindicaciones sumamente variada y que van de lo étnico a lo regional y teñidas, en todo caso, de fuertes contenidos nacionalistas, populistas y hasta etnicistas. Muchos de estos movimientos, como los piqueteros argentinos, los coccaleros bolivianos y peruanos o los campesinos «sin tierra» brasileños se encuentran muy próximos al «socialismo del siglo XXI» proclamado, que no definido, por el comandante Hugo Chávez.

EL ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

De acuerdo con el informe del Latinobarómetro 2005, no se han producido avances reseñables en los temas esenciales de la cultura democrática del conjunto de la región. En líneas generales, la desconfianza que los ciudadanos tienen en sus principales instituciones, políticas y no políticas, aumenta o se mantiene inalterable en relación a los años anteriores. Mientras tanto, y de forma paralela al peso del clientelismo y la corrupción (notas dominantes de un peculiar estilo de hacer política), vemos como la cultura cívica y la percepción del estado de derecho no mejoran entre la ciudadanía de los distintos países latinoamericanos. Simultáneamente y a caballo entre la recuperación económica y los coletazos de las últimas crisis y sus consecuencias devastadoras sobre el empleo, aumentan las expectativas de la gente por mejorar rápidamente su situación, sus condiciones de vida y el acceso a un puesto de trabajo, todo lo cual dificulta la gobernabilidad de sus países y la puesta en marcha de las políticas públicas más adecuadas para impulsar el bienestar general.

Por lo tanto, a partir de esas consideraciones iniciales, se puede afirmar de forma clara que el interés de los latinoamericanos por la política prácticamente no ha cambiado en los últimos 10 años, aunque las críticas a la política, especialmente a los políticos, sean persistentes y muy altas entre los habitantes de la región. En líneas generales, los autores del estudio son muy críticos con las afirmaciones, generalmente periodísticas, que hablan de una desafección creciente de las distintas opiniones públicas con la política. De ahí que sea coherente con esta postura el hecho de que, pese a todo, la aprobación del gobierno («la forma en que el presidente está dirigiendo el país») ha aumentado del 36% en 2002 al 49% en 2005. En buena medida la respuesta a esta pregunta refleja el peso del presidencialismo en toda la región. La respuesta también es consistente

con que los presidentes suelen ser bien valorados, aunque no es extraño que, por lo general, la aprobación de los gobiernos sea mejor que la imagen que se tiene de los presidentes.

A lo largo del período 1995-2005 el presidente y el gobierno, junto con las municipalidades (ayuntamientos), la policía y los bancos son las instituciones que han aumentado la confianza de la gente, mientras que la Iglesia y la televisión, las dos instituciones más valoradas por los ciudadanos, han ido perdiendo confianza, aunque se mantienen en los lugares más altos de las preferencias populares. El resto de las instituciones valoradas, entre las que se cuenta el Parlamento, la justicia, los partidos políticos o las fuerzas armadas se mantienen en sus niveles habituales de consideración. En general, el promedio de apoyo a las instituciones en toda la región es bastante bajo y habla de una gran falta de confianza por parte de los ciudadanos y de las dificultades para consolidar la democracia.

Una mayoría considerable de la población, el 70%, cree que la democracia tiene problemas, pero que se trata del mejor sistema político existente, y un 66% piensa que se trata del mejor sistema para alcanzar el desarrollo de su país. En 2005, y por tercer año consecutivo, el apoyo a la democracia en la región ha sido del 53%, mientras que a un 19% de la población, una cantidad nada despreciable, le da lo mismo el tipo de régimen político en el que vive. Es evidente, ante la magnitud del fenómeno, que los gobernantes latinoamericanos deben hacer serios esfuerzos por convencer a estos grupos más refractarios a admitir las virtudes de la democracia a fin de aumentar el apoyo que recibe este sistema político.

Por su parte, la satisfacción con la democracia es sensiblemente inferior al apoyo de la democracia y se sitúa en un 31%. Frente a la idea de cuán democrático es cada país, la media regional, en una escala de 1 a 10, se sitúa casi en el punto medio con un 5,5. Mientras Venezuela, Uruguay, Costa Rica y Chile se consideran los países más democráticos de los 18 analizados, la percepción sobre los que lo son menos es mayor en Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Perú y Guatemala. Bolivia, por su parte, que en los últimos años vio como se deponían violentamente a dos presidentes (Sánchez de Losada y Mesa), está por encima de la media, con un 5,2. Por eso será importante en los próximos, especialmente en aquellos países que han elegido presidentes definidos laxamente como de «izquierda», ver cómo incidirá el estado de la opinión pública en lo referente a la salud de la democracia, su reconocimiento y aprobación. Giran en torno a este punto las expectativas de numerosas sociedades de salir de las situacio-

nes de atraso y desigualdad que las caracterizan y las excesivas promesas vertidas por los políticos durante las campañas electorales, que luego resultan de difícil o imposible cumplimiento. Por eso será importante ver en las mediciones de 2006 el comportamiento de bolivianos, venezolanos, brasileños, argentinos y uruguayos, países todos donde se habla de «giro a la izquierda». ¿En qué cantidad las medidas adoptadas serán valoradas por la población o la frustración será la nota dominante, sabiendo que las diferencias nacionales serán de gran importancia?

De todas formas, en este apartado, la buena noticia es que en conjunto, la mayor parte de la población regional, un 62%, está totalmente en contra de una salida militar autoritaria, en cualquier circunstancia, mientras que sólo un 30% «apoyaría a un gobierno militar si las cosas se ponen muy difíciles». El rechazo al autoritarismo es menor al 50% en Paraguay, Honduras y Perú (en Ecuador sólo llega al 51%). Aquí resulta bastante llamativo el hecho de que en Venezuela el rechazo a la existencia de un gobierno militar se sitúa en un 66%, cuando es claramente manifiesto el objetivo del comandante Chávez de construir un régimen cívico-militar en su país, a la vez que aumenta la militarización de la vida cotidiana, especialmente en las escuelas. En Perú, el bajo rechazo al autoritarismo coincide con las buenas expectativas que las encuestas le dan a Ollanta Humala.

Uruguay, República Dominicana, Chile y Uruguay son los países que tienen una mayor percepción del estado de derecho, mientras que en Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia ésta es la menor de todos los países considerados. Esta clasificación coincide con la cultura cívica existente, ya que a mayor o menor cultura cívica, mayor percepción del estado de derecho por parte de la población. La excepción es Colombia, que pese a tener una débil cultura cívica valora ampliamente el estado de derecho. En el caso colombiano hay que tener en cuenta los importantes logros obtenidos por el presidente Álvaro Uribe con su política de seguridad democrática, que no sólo ha rebajado considerablemente el número de delitos y acciones terroristas, especialmente homicidios y secuestros, sino también ha aumentado de forma notable la sensación de seguridad existente entre los colombianos, que en los últimos años han dejado de vivir como rehenes apiñados en las ciudades, sin poder salir de ellas más que por vía aérea. Esta realidad es la que en buena medida explica los elevados índices, superiores al 70%, de aceptación del gobierno de Uribe.

Según la opinión pública regional, el poder del Estado y de los actores públicos y políticos ha disminuido en los últimos años en beneficio de

determinados actores privados. Se trata de una percepción preocupante, toda vez que alude directamente a la pérdida de control del gobierno y dificulta todavía más la aplicación de fórmulas coactivas para el eficaz cumplimiento de las leyes en los casos que sea necesario. Si en 2003 el 57% de la población de la región estimaba que el gobierno era quien tenía más poder, esta cifra ha bajado al 49% en 2005. Un fenómeno similar ha ocurrido con los partidos políticos que bajan del 39 al 34%. Por el contrario, ha aumentado el número de personas (de 40 al 44%) que creen que las grandes empresas son las que tienen más poder, mientras se mantiene prácticamente inalterable la percepción sobre el poder del Parlamento. Este sentimiento contrasta con algunas de las nuevas tendencias políticas en ascenso que exigen un reforzamiento del poder del Estado.

En los últimos años, la corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales de la población, y ocupa buena parte de la agenda política de los principales medios de comunicación, que dedican al tema una atención casi permanente. Esta situación realimenta el sentir ciudadano sobre el impacto negativo que la corrupción tiene sobre su vida cotidiana. Sin embargo, en Iberoamérica ha aumentado en el último año la percepción de que se está avanzando en la lucha contra la corrupción, pasando de un 26 a un 30% la gente que cree en esto. Mientras en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela se piensa que se han producido importantes progresos en este combate, por el contrario en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Nicaragua se produce un movimiento inverso. Junto con la corrupción, el desempleo y la inseguridad son dos de las máximas preocupaciones que tienen actualmente la mayor parte de los latinoamericanos.

ELECCIONES Y POLÍTICA

En marzo de 2005 se produjo la toma de posesión de Tabaré Vázquez como presidente del Uruguay. Se materializaba así la alternancia de un partido, en realidad una alianza de partidos, el Frente Amplio-Encuentro Progresista (FA), que tomaba el relevo a los centenarios partidos Blanco y Colorado. La llegada de Vázquez a la presidencia uruguaya también tenía otro significado, al aumentar el número de mandatarios considerados de izquierda en la región. En ese confuso conglomerado que se ha dado en llamar la izquierda latinoamericana, que incluye a personajes como los presidentes Kirchner (peronista) o Chávez y Evo Morales (claramente populistas), hay que destacar los casos de los presidentes Lula (Brasil),

Lagos (Chile) y Vázquez (Uruguay). En estos últimos casos se trata de políticos experimentados, con experiencia en la gestión pública o en la labor sindical, y pertenecientes a partidos con tradición, de al menos tres décadas de antigüedad, como el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño o el FA uruguayo. No estamos frente a recién llegados a la política o a candidatos pertenecientes a movimientos aluvionales, que abarcan un amplio espectro político, como el Partido Justicialista, o poco estructurados y que dependen del carisma del líder, como ocurre con el Movimiento por la V República (MVR) y el resto del conglomerado de las fuerzas bolivarianas de Venezuela. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) es más el producto de la suma de movimientos sociales que un partido organizado. Por el contrario, en Uruguay, el peso político y la hegemonía del FA se confirmaron en las elecciones locales y departamentales, donde obtuvo importantes ganancias, a la vez que aumentó la crisis de los partidos Blanco y Colorado.

La vida política del subcontinente, especialmente en la convulsa región andina, fue nuevamente sacudida por golpes de calle que propiciaron la caída del presidente ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, y la renuncia de Carlos Mesa, atezado por los bloqueos de carreteras y las protestas sociales. Mesa presentó su renuncia al Congreso por primera vez en marzo, pero la retiró ante el respaldo popular obtenido para mantenerse en el poder. Sin embargo, el capital político acumulado le duró poco tiempo y en junio presentó su renuncia definitiva, después de 20 meses de ejercer la presidencia. Si la posición de Mesa ya era de gran debilidad, por su falta de apoyos políticos y sociales, especialmente visibles entre los parlamentarios, su sucesor, Eduardo Rodríguez, quedó en una situación bastante más débil. Sin embargo, su principal, y mayor, fortaleza fue ser el encargado de la convocatoria electoral, que en diciembre de 2005 eligió a su sucesor y renovó el Parlamento nacional. Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo, era el tercero en el orden sucesorio, después del presidente del Senado y del presidente del Congreso, y accedió al poder tras la renuncia de los dos altos cargos parlamentarios, cuestionados por varios movimientos sociales y políticos, con el MAS, de Evo Morales, a la cabeza, por su pertenencia a los llamados «partidos tradicionales» y ser identificados con la corrupción vinculada a la política. Está por ver en qué medida el contundente resultado de las elecciones de diciembre será capaz de provocar un vuelco en la situación política del país y de repercutir sobre su futuro inmediato, más allá de los gestos rituales y ceremoniales tan del gusto del nuevo presidente y de su retórica fuertemente confrontacionista.

También está en una posición de gran debilidad Alfredo Palacios, el sucesor de Gutiérrez, que asumió el mando en abril de 2005, cuando el Congreso decidió deponer a su antecesor por «abandono del cargo». Resulta curioso que tanto en el caso de Mesa como de Palacios, los nuevos presidentes, llegados al poder en circunstancias excepcionales y carentes de la legitimidad de origen que proporciona un triunfo electoral, intentaran impulsar, aunque sin éxito, profundas reformas institucionales o convocaran referendos sobre temas trascendentales para el futuro público, como puede ser la cuestión de los hidrocarburos o una reforma constitucional. En una especie de huída hacia delante, intentando compensar la falta de apoyo político con medidas para ganarse a las masas, en ambos casos se compromete la gobernabilidad del país. Es verdad, que la debilidad institucional y la crisis permanente que golpea al sistema de partidos en ambos países han propiciado salidas de este tipo, planteadas, entre otras cuestiones, para ganar tiempo.

Mientras tanto en el Perú, otro de los países andinos más conflictivos, el presidente Alejandro Toledo ha sobrevivido a las protestas sociales, a las investigaciones parlamentarias y a las duras críticas de los medios de comunicación sobre su gestión. Debido a este aluvión de críticas y a la percepción de un grave incumplimiento de la mayor parte de las promesas electorales, pese a la buena marcha de la economía, su mandato se ha caracterizado por las bajas cotas de confianza que tiene entre los ciudadanos peruanos, a tal punto que en más de una ocasión las cifras de las encuestas situaban su popularidad por debajo del 10%. Sin embargo, a pesar de todo, Toledo se encamina al final de su mandato, dispuesto a traspasar pacíficamente el poder al nuevo presidente que sea electo en mayo de 2006.

2005 asistió al nacimiento en el Perú del etnocacerismo, un movimiento impulsado por los hermanos Ollanta y Antauro Humala, que mezcla elementos étnicos con un fuerte nacionalismo y populismo, a la vez que incorpora toda una simbología con numerosos elementos fascistas. De momento Ollanta Humala, que se presenta como candidato a las elecciones presidenciales ha logrado un respaldo popular que algunas encuestas sitúan en torno al 20%, aunque habrá que ver la evolución del candidato, especialmente cuando se involucre más activamente en la campaña. Un hecho que de seguro tendrá gran importancia es la repercusión en el Perú del triunfo de Evo Morales y sus efectos sobre la población indígena, así como el fuerte respaldo recibido del comandante Chávez. En los últimos meses de 2005 el ambiente preelectoral se ha caldeado con la llegada de

Alberto Fujimori a Chile, su encarcelamiento en Santiago y la petición de extradición de la justicia peruana al gobierno chileno, un extremo que deben resolver los magistrados de Chile, pero también con el rebrote del narcoterrorismo de Sendero Luminoso y las reivindicaciones cocaleras.

En Colombia, después de una prolongada deliberación, la Corte Constitucional ha declarado la legalidad de la reforma aprobada por el Congreso nacional de la Constitución de 1991 que había permitido la reelección presidencial en mandatos consecutivos. La posibilidad o no de la reelección se había convertido en el principal tema de la agenda política ya que alentaba ciertas expectativas de los probables candidatos diferentes al presidente, pero también estaba condicionando no sólo el proceso de desmovilización de los paramilitares, reforzado con la sanción de la ley de Justicia y Paz, sino también la dinámica de la propia lucha antiterrorista. Conocido el fallo de la Corte, son muchos los analistas que especulan con una ofensiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para «aguar la fiesta» al que consideran su principal enemigo. Pese a las críticas y a las contradicciones en que se desarrolla, el proceso de desmovilización de los «paras» ya ha afectado a más de 10.000 personas y se mantiene vivo pese a las numerosas críticas recibidas y a sus propias contradicciones. La posición del gobierno se ha reforzado con los tímidos avances logrados en La Habana en las pre-negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, mientras que las conversaciones con las FARC en torno al canje humanitario siguen estancadas.

La reforma constitucional chilena permitió eliminar los enclaves autoritarios todavía remanentes de la elaborada en su día por la dictadura de Pinochet. De este modo se acabó con los senadores vitalicios, el presidente de la República puede destituir a los Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) deja de tener la importancia pasada y se convierte sólo en un órgano asesor del presidente. Ha quedado pendiente, mediante la elaboración de una nueva ley electoral, que sigue encontrando fuertes resistencias en la derecha, la reforma del sistema de dobles circunscripciones que caracteriza las elecciones parlamentarias chilenas. En Chile, el proceso de selección del candidato de la Concertación, la alianza electoral oficialista que reúne a la Democracia Cristiana y a los socialistas, se zanjó a favor de la candidata socialista Michele Bachelet, la nueva presidenta del país. Por su parte, a diferencia de otras oportunidades, la derecha concurrió dividida a la elección, ya que a la candidatura de Joaquín Lavín se sumó posteriormente la de Sebastián Piñera, por Renovación Nacional (RN). Se trató de una fór-

mula que como se pudo comprobar finalmente no funcionó y terminó perjudicando a su principal impulsor, Sebastián Piñera. El resultado de las elecciones de diciembre dejó sensaciones ambivalentes a la Concertación gobernante, que pudo hacer efectivo su control de ambas Cámaras. Sin embargo, mientras el avance de los partidos de izquierda fue claro, la situación de la Democracia Cristiana (DC) es algo más comprometida. Por otro lado, en el frente presidencial la primera vuelta no solucionó nada y mantuvo el enfrentamiento entre Bachelet y Piñera, que se saldó de forma contundente a favor de la candidata socialista, que obtuvo una ventaja de casi el 7%.

Cuadro 1. Calendario electoral 2005 en América Latina

Fecha	País	Tipo de Elección
6 de febrero	México	Estado de Baja California Sur (Gobernador/Congreso/Municipales) Estado de Guerrero (Gobernador/Congreso/Municipales) Estado de Quintana Roo (Gobernador/Congreso / Municipales)
20 de febrero	México	Estado de Hidalgo (Gobernador/Congreso/Municipales)
27 de febrero	Argentina	Provincia de Santiago del Estero (Gobernador)
17 de abril	Cuba	Municipales (Primera vuelta)
24 de abril	Cuba	Municipales (Segunda vuelta)
5 de mayo	Venezuela	Municipales y Juntas Parroquiales
8 de mayo	Uruguay	Municipales
3 de julio	México	Estado de México (Gobernador) Estado de Nayarit (Gobernador/Congreso/Municipales)
25 de septiembre	México	Estado de Coahuila (Gobernador / Congreso / Municipales)
Septiembre	Paraguay	Municipales
23 de octubre	Argentina	Legislativas
13 de noviembre	Haití	Presidenciales (Primera vuelta) y Legislativas*
27 de noviembre	Honduras	Generales
4 de diciembre	Venezuela	Legislativas
11 de diciembre	Chile	Presidenciales y Legislativas
11 de diciembre	Haití	Presidenciales (Segunda vuelta)*
18 de diciembre	Bolivia	Presidenciales, Legislativas, Prefectos

* No se celebraron

En lo que al calendario electoral se refiere, 2005 no ha conocido un número significativo de elecciones determinantes como sí ocurrirá en 2006, aunque en el último trimestre hubo elecciones presidenciales en Chile (primera vuelta), Honduras y Bolivia. Pese a ello, la norma en muchos países, especialmente visible en los más grandes, fue la toma de posiciones para las elecciones presidenciales de 2006, como se comprobó en México y Brasil. En México se completó el largo y prolongado proceso de definición de las candidaturas, que consagró a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el que de momento cuenta con mayores posibilidades; a Roberto Madrazo, por el Partido de la Revolución Institucional (PRI), tras una desgarradora retahíla de expulsiones y deserciones de la carrera electoral, y a Felipe Calderón Hinojosa del Partido Autonomista Nacional (PAN), pese a no ser el candidato favorito del presidente Fox. Si algo mostraron las elecciones a gobernador de los distintos estados puestos en juego es que el PRI no está totalmente acabado, pese a los problemas de imagen que supone la candidatura de Madrazo y que puede dar todavía mucha batalla, toda vez que las encuestas favorables a López Obrador son algo menos favorables tras su abandono de la alcaldía de la Ciudad de México y del fin del contencioso legal que mantenía con el presidente Fox, que buscaba su desafuero y su expulsión de la carrera presidencial. En este caso, el papel de víctima, junto a su gestión populista y su gran visibilidad pública habían aumentado la popularidad de López Obrador. Tampoco se deben descartar las posibilidades de Felipe Calderón, que en poco tiempo ha consolidado su posición en las encuestas y se manifiesta como el candidato a batir por López Obrador.

En Brasil, cuando nadie disputaba el liderazgo del presidente Lula, pese a algunas disensiones en el ala izquierda de su partido y cuando la marcha de la economía hacía presagiar una deriva nada complicada para la reelección del presidente, estallaron los escándalos de corrupción que ya se han cobrado varias víctimas en el entorno más cercano al propio Lula. En el gobierno, el más seriamente tocado fue José Dirceu, el ministro de la Casa Civil de la Presidencia, una especie de Jefe de Gabinete, que debió dimitir en junio pasado. Por su parte, el tesorero, Delúbrio Soares, y el secretario general, Silvio Pereira, del PT también debieron renunciar en medio de una serie continuada de escándalos que afectaron la imagen del partido del gobierno. El PT, que ha cambiado su presidente, ha hecho un serio esfuerzo por aislar al presidente y mantenerlo al margen de los escándalos, lo que se logró a medias y por eso la imagen del presidente ha comenzado a erosionarse. De ahí la elevada incertidumbre sobre las posibilidades de Lula ante su reelección.

Cuadro 2. Calendario electoral 2006 en América Latina

Fecha	País	Tipo de Elección
8 de enero	Haití	Presidenciales (Primera vuelta) y Legislativas
15 de enero	Chile	Presidenciales (Segunda vuelta)
5 de febrero	Costa Rica	Presidenciales y Legislativas
15 de febrero	Haití	Presidenciales (Segunda vuelta)
5 de marzo	Haití	Municipales
12 de marzo	México	Estado de México (Congreso/Municipales)
Marzo	Colombia	Legislativas
2 de abril	Costa Rica	Posible segunda vuelta presidencial
9 de abril	Perú	Presidenciales y Legislativas
Marzo	Colombia	Legislativas
16 de mayo	República Dominicana	Legislativas y Municipales
Mayo	Colombia	Presidenciales
2 de julio	México	Presidenciales y Legislativas (Nacional) – Distrito Federal (Gobernador/Congreso/Municipales) – Estado de Guanajuato (Gobernador/Congreso/Municipales) – Estado de Jalisco (Gobernador/Congreso/Municipales) – Estado de Morelos (Gobernador/Congreso/Municipales) – Estado de Campeche (Congreso/Municipales) – Estado de Colima (Congreso/Municipales) – Estado de Nuevo León (Congreso/Municipales) – Estado de Querétaro (Congreso/Municipales) – Estado de San Luis Potosí (Congreso/Municipales) – Estado de Sonora (Congreso/Municipales)
20 de agosto	México	Estado de Chiapas (Gobernador)
1 de octubre	Brasil	Presidenciales, Legislativas y Gobernadores
19 de octubre	México	Estado de Tabasco (Gobernador)
29 de octubre	Brasil	posible segunda vuelta presidencial y gobernadores
Octubre	Ecuador	Presidenciales
5 de noviembre	Nicaragua	Presidenciales y Legislativas
Diciembre	Venezuela	Presidenciales

Las elecciones legislativas de Argentina, presentadas como un plebiscito por el presidente Kirchner con el objetivo de aumentar su legitimidad, después de haber llegado al poder sólo con el 22% de los votos, fueron ganadas por el oficialismo, que obtuvo cerca del 40% de los votos. Si bien el resultado no le otorga la mayoría absoluta del Congreso, donde debería negociar con otros grupos parlamentarios para poder sacar adelante sus proyectos, la posición del presidente Kirchner y su peronista Frente para la Victoria es de fuerza dada la debilidad de la oposición, como se ha visto en la controvertida discusión parlamentaria para aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura (Consejo del Poder Judicial). En las elecciones parlamentarias, la suma del centroderecha sólo logró cerca del 10% de los votos, lo mismo que el centro izquierda (el ARI de Elisa Carrió y los socialistas triunfantes de la provincia de Santa Fe), el radicalismo apenas superó el 9% y el peronismo no alineado con el presidente (Duhalde en Buenos Aires, Menem en La Rioja o Rodríguez Sáa en San Luis) alcanzó más del 15%.

LA ECONOMÍA

El FMI estima que la coyuntura económica mundial seguirá siendo propicia para América Latina. Si bien en 2005 se moderó la actividad económica mundial, las perspectivas a corto plazo, tanto para el conjunto del planeta (se espera un crecimiento del PIB mundial superior al 4,25% para 2005 y 2006) como para América Latina (4% de aumento del PIB en 2005 y 3,75 en 2006) son muy sólidas. La expansión actual parece ser más firme que las anteriores, ya que muchos países han realizado ajustes estructurales en materia fiscal. Sin embargo, después de las cifras obtenidas en 2004, la más alta de los últimos 24, el crecimiento de la región se está moderando, aunque las tasas previstas para 2005 y el año siguiente siguen siendo superiores a la media histórica. Todo parece indicar que estamos frente a una expansión más estable que las anteriores, gracias a la aplicación de políticas macroeconómicas correctas, aunque se mantienen algunas amenazas que podrían afectar el crecimiento, como un mayor precio del petróleo, el debilitamiento de las materias primas o un aumento del riesgo en los mercados emergentes, hasta ahora beneficiados por las bajas tasas de interés mundiales. Hay que tener en cuenta que desde comienzo de la década de 1980, el aumento promedio del PIB real en América Latina fue del 3,5% y el crecimiento per cápita inferior al 1,5%, cifras inferiores a las logradas en otros países emergentes, especialmente de Asia.

En 2005, la mayor parte de los países de la región siguieron consolidando su posición fiscal y lograron reducir la relación entre deuda pública y PIB. A fines de 2005 el endeudamiento latinoamericano supondrá un 45,9% del PIB, un notable descenso desde su máximo de 2002, cuando había alcanzado el 61,3% del PIB regional, lo que supone un descenso del endeudamiento en más de 15 puntos del PIB. Entre los factores que sostienen la reducción de la vulnerabilidad externa está la mejora en la obtención de superávits fiscales primarios, el crecimiento económico, la reestructuración de la deuda y la apreciación de las monedas nacionales respecto al dólar.

En América Latina el crecimiento se apoya, en buena medida, en el incremento de los precios de las materias primas, que han permitido una mejora de los términos del intercambio y han aumentado los ingresos por exportaciones. Otro factor importante que sostiene el crecimiento es la demanda interna, que sigue firme (en Brasil ha cobrado un importante impulso). México y los países de América del Sur se han beneficiado del incremento del precio de combustibles, alimentos y metales, aunque en América Central y el Caribe el aumento del precio de los combustibles puede convertirse en una amenaza para el crecimiento. El petróleo, el caso más típico de materia prima en alza, pasó del 45 dólares el barril a 65 dólares (casi un 45%) entre agosto de 2004 y el mismo mes de 2005. Pero no se trata sólo del petróleo, ya que el cobre vio como su precio aumentaba de 1,29 dólares la libra a 1,75 dólares (algo más del 35%) en el mismo período.

Pese al incremento del precio del petróleo, la inflación se ha estabilizado. En Colombia bajó del 6,5% en 2003 al 5% en septiembre de 2005, el nivel más bajo en décadas. En Brasil se espera una cifra muy cercana para 2005, mientras Chile y Perú se mueven en torno al 2 y al 3%. Si bien se estima que la inflación regional pase del 6,5% en 2005 al 5,5% 2006, Argentina ha llegado a dos dígitos y Venezuela fluctúa entre el 17% y el 18%. El superávit de la balanza de pagos, combinado con el aumento de las reservas de divisas y las mejoras obtenidas por los gobiernos en las condiciones de los vencimientos y plazos de la deuda externa, permite depender menos de los flujos de capital extranjero. También ha mejorado el coeficiente de inversión, cercano al 20% del PIB, aunque algunos países, como Argentina o Uruguay están llegando al límite de su capacidad instalada, tras un período de crecimiento acelerado, y necesitarían nuevas inversiones para mantener su actual ritmo de crecimiento.

En 2004, América Latina, junto al Caribe, recibió inversiones extranjeras directas (IED) por un valor superior a los 56.400 millones de dólares, lo que supone un aumento del 44% con respecto a los 39.100 millones que ingresaron en 2003. La inversión española en la región a lo largo de 2004 superó los 9.100 millones, lo que supone algo más del 16% del total mundial y un incremento del 71% de la inversión en relación a 2003. México, con 5.200 millones de euros fue el país más favorecido por la inversión española y en este caso la adquisición de Bancomer por parte del BBVA supuso 4.200 millones de dólares. El stock de la IED española en América Latina ya ronda los 90.000 millones de euros, siendo los principales países receptores de inversión Argentina (30.000 millones de euros de stock), Brasil (25.000 millones), México (14.500 millones), Chile (10.500 millones), Perú (3.100 millones), Colombia (3.000 millones), Venezuela (2.400 millones), Uruguay (2.400 millones) y Cuba (836 millones). De este modo España sigue siendo el mayor inversor extranjero en Argentina; es el segundo en Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela y es el tercero en México.

El fortalecimiento de la política económica y el clima de mayor confianza se ven en la apreciación de los tipos de cambio y en seis países relevantes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) el tipo de cambio se apreció un 9% en el primer semestre de 2005, sin llegar a afectar a las exportaciones. Simultáneamente, las reservas siguen aumentando. En Argentina, son de casi 26.000 millones dólares, lo que equivale a nueve meses de importaciones, mientras en Perú las reservas representan más del 270% de los vencimientos de la deuda externa a corto plazo.

El buen escenario económico ha repercutido en una mejora del empleo y en aumentos de los salarios reales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de paro urbano se redujo del 10,9 al 9,6% en el primer semestre del año, como consecuencia de haber disminuido en siete de los nueve países de los que se dispone información. Al analizar la tasa de desempleo de ese semestre, se ve que la desocupación cayó en Argentina (de 14,6% a 12,5%), Brasil (12,3% a 10,3%), Chile (8,9% a 8,3%), Colombia (16,5% a 15,0%), Ecuador (11,3% a 11,1%), Uruguay (13,5% a 12,2%) y Venezuela (16,6% a 13,2%) mientras que aumentó ligeramente en México (3,7% a 3,9%) y Perú (10,1% a 10,5%). Sin embargo, las cifras del crecimiento económico contrastan con la persistencia de la pobreza y la extrema pobreza, así como de la gran desigualdad existente en la región. Progresos en Chile pero lentos avances en la mayor parte de los países.

LAS TRABAS A LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Señalábamos al comienzo de este trabajo que los resultados de las dos Cumbres realizadas, la Iberoamericana y la de las Américas, permitían un diagnóstico de la situación internacional del continente. Es obvio que este diagnóstico no refleja la totalidad de los problemas de la región, pero sí se hace eco de las principales tendencias existentes. Si algo ha puesto en evidencia las dos reuniones mencionadas son las dificultades que tiene la región para avanzar en el proceso de integración regional. Si hacemos caso a los planteamientos rupturistas del comandante Chávez en sus manifestaciones en la contracumbre de los Pueblos, de Mar del Plata («*hemos venido aquí a enterrar al ALCA*»), el principal obstáculo en el avance de la integración regional se debe a la férrea oposición de los Estados Unidos, el viejo imperialismo yanqui de toda la vida, partidario de la teoría del «divide y vencerás». Hoy Estados Unidos, como en el siglo XIX Gran Bretaña, sería el mayor enemigo de la integración regional, porque ella permitiría el despegue definitivo de la economía latinoamericana y el fin de la dominación neocolonial. Pero una lectura atenta de las Cumbres de Salamanca y Mar del Plata, como referentes de los sucesos que están ocurriendo actualmente en América Latina, permite sacar a la superficie una serie de tensiones bilaterales que nos están indicando dónde están los verdaderos frenos a la integración: dentro de América Latina y no fuera de ella.

En Mar del Plata quedaron patentes, una vez más, las diferencias entre Chile y Perú, esta vez por la sanción de una ley peruana en torno al trazado de los límites marítimos entre ambos países. También fueron visibles los problemas existentes entre Argentina y México por la organización de la Cumbre y entre Argentina y Uruguay por la construcción de dos fábricas de papel en la zona uruguaya de Paysandú. Argentina se opone recurriendo a argumentos medio ambientales pero Uruguay insiste en los cientos de puestos de trabajo que creará dicha inversión. A estos problemas se agregan otros, como las diferencias entre Brasil y México, por el liderazgo regional y por la titularidad ansiada de un puesto permanente en el algún día reformado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; entre Brasil y Argentina, por el Mercosur; entre Bolivia y Chile, por el gas; entre Colombia y Venezuela, por el supuesto tratamiento favorable que otorga Venezuela a los terroristas colombianos de las FARC y el ELN; entre Ecuador y Colombia por las fumigaciones con glifosato que realiza el ejército en los cultivos de coca existentes en la zona fronteriza o entre Cuba

y cualquier país latinoamericano que ose criticar su política de derechos humanos. Sin embargo, en Mar del Plata se vivió intensamente una nueva situación, hasta ahora latente: el duro enfrentamiento entre los presidentes Fox y Chávez por lo que el primero llamó los ataques ideologizados del segundo contra el libre comercio y sus posibilidades de progreso para el conjunto de la región.

Se podría señalar que entre los tres principales obstáculos para el progreso de la integración regional tenemos el exceso de retórica y de nacionalismo, a lo que se suma un importante déficit de liderazgo. El exceso de retórica ha venido condicionando todo el proceso de unidad regional desde sus mismos inicios, al rodearlo de una mística nacionalista. Se plantea básicamente la unidad por la unidad, sin metas políticas claras y se la presenta a ojos del pueblo como una de las mejores recetas para salir del atraso y superar todos los males y problemas de la región. La mejor prueba de que no se sabe para qué se quiere la integración regional es que ahora se presenta a Simón Bolívar, José de San Martín y José Martí como los tres grandes precursores de esa unidad. No sería mala cosa recordar el carácter autoritario, oligárquico y antiliberal de Bolívar o las tendencias monárquicas de San Martín, dos personajes, por otra parte, muy ajenos a la historia de México y Brasil, dos países claves en el proceso de unidad latinoamericana. La retórica impulsa la creación de nuevas instancias integradoras, conformando una verdadera sopa de letras donde resulta difícil avanzar, como han demostrado los escasos logros de la Comunidad Sudamericana de Naciones, la última propuesta en la materia, esta vez impulsada por Brasil, aunque las dificultades de su gobierno, golpeado por los casos de corrupción, se ha convertido en un pesado lastre en su avance. Por su parte, el exceso de nacionalismo impide cualquier cesión de soberanía en instancias supranacionales, necesarias para impulsar cualquier proceso de integración regional o subregional.

En el otro lado tenemos el déficit de liderazgo. Ni México ni Brasil, los dos grandes gigantes de América Latina, han decidido jugar el rol que les correspondería por su tamaño y su fortaleza política y económica. Ni siquiera Argentina, cuando estaba en condiciones de hacerlo, siquiera lo intentó. Es más, no sólo ni Brasil ni México ejercen el liderazgo que deberían ejercer, sino también están enfrentados entre sí, lo que dificulta enormemente cualquier acción coordinada en este sentido. Si Brasil prefiere hablar de América del Sur, México durante bastante tiempo enfatizó su mirada más en el norte del continente, hacia Canadá y los Estados Unidos, que hacia el sur, aunque ahora está intentando volver a sus raíces. Por eso,

no deja de ser significativo que la mayor parte de los latinoamericanos confíe más en Brasil que en México, pero al mismo tiempo México, según el Latinobarómetro, es el país latinoamericano que está más a favor de la integración económica regional, el 92% de la población, mientras que Brasil es el país que menos cree en este proyecto con el 80%.

En este punto contrasta la experiencia europea donde el eje franco-alemán se convirtió en un claro impulsor de la unidad de lo que terminaría siendo la UE. Mientras tanto, el vacío de liderazgo intenta ser cubierto por el venezolano Chávez, quien gracias a la importancia creciente del factor energético en las políticas de crecimiento económico y a los elevados precios del petróleo, tiene en sus manos un arma poderosísima para impulsar su política exterior. Es verdad que el factor energético puede ser una poderosa palanca para impulsar la unidad, que en Europa giró en buena medida en torno a la Comunidad del Carbón y del Acero. Sin embargo, ante la falta de propuestas políticas claras, la gran duda es cuán sostenible puede ser un proceso que no sólo genera pasiones en las multitudes, sino también grandes recelos entre los gobernantes y sectores igualmente importantes de las sociedades de la región.

Mientras el presidente Chávez presenta al ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) como la contracara del ALCA, ésta última avanza a trompicones. Una vez descartada la fecha del 2005 como la de la puesta en marcha del gran mercado americano, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, los países implicados optaron por negociaciones bilaterales o subregionales con los Estados Unidos para la firma de tratados de libre comercio. Eso fue lo que hizo Chile en su momento y es lo que se plasmó en el CAFTA (Tratado de Libre Comercio de América Central, en sus siglas inglesas), que incluye también a la República Dominicana. Mientras tanto, continúan las negociaciones entre Colombia, Perú y Ecuador con los Estados Unidos por lograr otro acuerdo similar, toda vez que resultaba imposible la negociación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en su conjunto, dada la resistencia venezolana a negociar con los Estados Unidos y el estado de turbulencia interna que atraviesa Bolivia, que hacía totalmente desaconsejable incluir al país andino en el grupo negociador.

Quienes de forma más clara se oponen al proyecto del ALCA son los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Venezuela, aunque las razones de unos y otros no son similares. Venezuela se opone al ALCA por razones estrictamente ideológicas, ya que el petróleo, su principal y casi único producto de exportación no necesita de acuerdos

comerciales de ningún tipo para tener acceso a los mercados. Las resistencias mercosureñas se basan, por su parte, en la política de subsidios a la agricultura que práctica el gobierno de los Estados Unidos y en su intento de acabar con la protección en el mercado de servicios y en el proceso de compra por los aparatos estatales de los países latinoamericanos. Sin embargo, las posturas de todos los países miembros del Mercosur no son unitarias. Brasil y Argentina son los más beligerantes y de alguna manera mantienen la unidad del Mercosur por la posibilidad de negociar como bloque (4 + 1) con Washington. Mientras tanto, Uruguay ha firmado con los Estados Unidos un Tratado de Promoción y Protección de Inversiones (Paraguay está intentando lo propio), distanciándolo de sus dos socios mayores del Mercosur. Por su parte, la actitud de Paraguay, al no reconocer la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional sobre las tropas norteamericanas que se puedan estacionar en su territorio, así como por las facilidades dadas al FBI para vigilar la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), constantemente sospechosa de abrigar células durmientes o de financiación de Al-Qaeda, también ha causado profundo malestar entre sus vecinos. La incorporación de Venezuela al Mercosur, así como los intentos de hacer rápidamente lo mismo con Bolivia, tendrán que pasar por un largo proceso de adaptación de la legislación venezolana y boliviana a la normativa del Mercosur para que la incorporación sea plena y para ello se estima un período no inferior a los cinco años.

En las actuales circunstancias y a la vista de algunos de los resultados electorales que se están produciendo en la región, el gobierno de Estados Unidos tiene cada vez mayores dificultades para sintonizar con América Latina, como ha puesto en evidencia las dificultades surgidas con México en el proyecto de construcción de un muro en varios tramos de la frontera entre ambos países. Estos problemas se unen a los ya existentes con Cuba y Venezuela, una lista a la que se podría sumar Bolivia de prosperar algunos de los planes de Evo Morales con respecto a la producción de coca o a la nacionalización de los recursos energéticos. A la vista de esta falta de sintonía con el primer actor regional crece el papel de China en la región. Las expectativas desatadas por el viaje del presidente Hu a América Latina fueron desmedidas, pero no hay que olvidar el papel creciente que tienen las exportaciones de minerales y otros productos primarios al mercado chino (y asiático en general), así como su impacto sobre los precios de las materias primas. A este paso no es aventurado pensar que China puede convertirse en poco tiempo en el principal actor extrarregional, desplazando de este lugar a España. Sin embargo, el papel creciente de los intereses chinos en América Latina debe ser visto más

como una oportunidad por las empresas y los intereses españoles que como una amenaza a las posiciones conquistadas.

Mientras tanto, las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur siguen estancadas. Las distintas rondas realizadas terminaron en nuevas frustraciones dadas las rigideces de unos y otros, que impiden cualquier avance sustancial. En este sentido, los resultados de la reunión de Hong Kong de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no fueron todo lo satisfactorio que se esperaba desde la perspectiva de los países americanos. También aquí, los subsidios agrícolas, vinculados a la Política Agraria Común (PAC) son el principal obstáculo, pero no el único, para avanzar en este tratado. En este sentido, la propuesta de los Estados Unidos de rebajar los subsidios agrícolas en paralelo a la UE fueron considerados insuficientes por Brasil y Argentina.

ESPAÑA E IBEROAMÉRICA

La política española hacia América Latina a lo largo de 2005 giró en torno a la preparación de la Cumbre de Salamanca. Al margen de ello, la relación con Cuba y Venezuela ocupó el centro de atención y llevó, incluso, a la ruptura del consenso en esta importante materia de la proyección internacional de España. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso un gran esfuerzo en organizar la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, ya que pensaba que se trataba de un momento especialmente idóneo para relanzar el proyecto iberoamericano que había atravesado por momentos de un grave *impasse*. El eje central del proyecto español era la propuesta de creación de una Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), presentado en la Cumbre de 2003 por el gobierno del presidente José María Aznar. El balance de Salamanca es positivo y precisamente uno de sus principales logros, aunque no el único, fue la puesta en marcha de la SEGIB, a cuyo frente se situó a Enrique Iglesias, ex director general del Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien España seguirá financiando el 70% del presupuesto de la SEGIB y los estatutos aprobados, sensiblemente rebajados en las capacidades políticas de la Secretaría, no son los más adecuados, hay bastante optimismo sobre las reales posibilidades de la SEGIB, que se espera que se convierta en la voz de Iberoamérica en los principales foros multilaterales internacionales. Es obvio que deberá llegar a un entendimiento y a una coordinación con la OEA, pero también es evidente que la personalidad de los dos secretarios generales, Enrique Iglesias y José Miguel Insulza, facilitará enormemente las cosas.

Probablemente las elevadas expectativas puestas en la Cumbre de Salamanca han impedido ver sus logros, importantes y suficientes. Entre las expectativas figuraba la asistencia de todos los mandatarios, como si una mayor o menor presencia fuera sinónimo de éxito o de fracaso, aunque es evidente que éste no debe ser el baremo para juzgar sus resultados. Días antes de su comienzo parecía que el objetivo podría cumplirse, salvo la incertidumbre permanente con Fidel Castro. Sin embargo, la conjura de los elementos, sintetizada en el huracán Stan, se cobró las bajas de los presidentes de Guatemala y El Salvador. A ellos se sumaron los presidentes de Nicaragua (amenazado por una antinatural pinza liberal-sandinista) y Ecuador (en una posición muy débil ante el retorno de Lucio Gutiérrez). A esto se sumó la defección de Castro. De las cinco ausencias la más inexplicable fue la del ecuatoriano Alfredo Palacio, que tiene en España una colonia de cientos de miles de compatriotas.

La Cumbre también tuvo otros puntos rescatables, al margen de la puesta en marcha de la SEGIB, como la reducción del tamaño del comunicado final, la transformación de las sesiones públicas y abiertas, plagadas de discursos grandilocuentes, en tres reuniones discretas de trabajo de los mandatarios y sus cancilleres, que debería ser el comienzo de un nuevo estilo de hacer las cosas. A esto se suma el trabajo de la «precumbre», especialmente los foros cívico y empresarial. Sería bueno que su convocatoria continuara en las próximas reuniones (Uruguay, 2006, y Chile, 2007) y que en un futuro cercano ambos dialogaran entre sí.

En lo que respecta a Cuba, la iniciativa gubernamental de impulsar la modificación de la postura común europea en relación a la dictadura castrista y su política de violación de los derechos humanos fue contestada por el Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición que veía en esta actitud una concesión gratuita al gobierno de Fidel Castro. En realidad, se puede decir que la política española hacia Cuba en los últimos años ha estado marcada por la continuidad y que más allá de la postura de mayor enfrentamiento o de mayor diálogo es poco lo que se puede hacer dada la cerrazón de Castro y su escasa o nula voluntad por potenciar en la negociación o el diálogo. Esto es así a tal punto que cualquier crítica que en materia de derechos humanos se pueda verter contra el gobierno cubano es vivida como una clara ingerencia en sus asuntos internos. Venezuela fue otro punto de conflicto a partir de la decisión gubernamental de vender aeronaves y embarcaciones militares al comandante Hugo Chávez. Esta decisión se produjo tras los avances autoritarios ocurridos en el país después del triunfo oficialista en el referéndum revo-

catorio y en medio de las maniobras para rearmar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) y crear una gran reserva militar. Si a esto le agregamos las tensiones crecientes con el gobierno de los Estados Unidos las condiciones para la polémica están servidas.

La postura del gobierno de España se ampara en la necesidad de mantener buenas relaciones con todos los gobiernos y países iberoamericanos. De ahí también los esfuerzos por equilibrar la situación respaldando claramente la política de seguridad democrática del presidente Uribe en Colombia en su lucha contra el terrorismo. Sin embargo, más allá de los claros errores cometidos a la hora de vender un producto demasiado complicado, lo cierto es que España debería asumir una postura mucho más clara en defensa de la democracia representativa y de los derechos humanos, y más en un momento como el actual en que los avances del populismo son evidentes. Por eso, el gobierno tiene un claro desafío en su empeño por potenciar su política iberoamericana, aunque episodios como el de la broma radiofónica a Evo Morales poco ayudan a mejorar la imagen de España en la región y a reformular el consenso en la política hacia América Latina. En momentos como el actual, cuando los cambios llegan a muchos países de la región, España debe tener claro qué quiere, puede y tiene que hacer a fin de no perder una influencia política sumamente relevante para el conjunto de su acción exterior.